

las universidades, que obstaculiza el desarrollo de nuevo pensamiento. En las universidades públicas, los docentes políticamente activos, con frecuencia en alianza con estudiantes y funcionarios administrativos, bloquean con éxito los intentos de lograr que las universidades rindan cuenta a otros actores, o que sirvan otros intereses que los propios. Normalmente, las universidades privadas sufren del exceso de influencia por parte de los fundadores o de la debilidad de sus consejos directivos.

Además, a la generación más joven de docentes, con frecuencia mejor preparada en investigación que sus predecesores, le es difícil conseguir un trabajo académico en universidades obstruidas por profesores en edad de retiro, reticentes a jubilarse, ya que a menudo hacerlo es financieramente desastroso. Aún peor es la situación de las universidades públicas que deben pagar pensiones a sus profesores jubilados con cargo a sus presupuestos operativos. Lamentablemente, las oportunidades de desarrollo profesional en las universidades de investigación no son suficientemente atractivas para el mejor talento joven en un mercado global competitivo.

Los recursos también son un problema; la educación superior está consistentemente desfinanciada a través de la región. Pero los gobiernos son reacios a aumentar la inversión pública cuando las instituciones no están dispuestas (o no son capaces) de garantizar que los fondos se gasten transparente y efectivamente. Por eso, no es sorprendente que gran parte del crecimiento se haya desarrollado en el sector privado. A medida que las instituciones privadas se vuelven elegibles para recibir financiamiento público, ha surgido una tensión entre las instituciones públicas y privadas, además de un debate sobre quién paga por ello, cuáles bienes públicos vale la pena subsidiar, qué fondos deberían ser asignados competitivamente, cuáles deberían ser los umbrales de calidad para el dinero público y otros asuntos.

A nivel político, existe una generalizada falta de comprensión sobre el rol fundamental que los sistemas de educación superior desempeñan en el desarrollo sustentable. La falta de políticas amplias y estrategias a largo plazo que vayan más allá del período de un gobierno obstaculiza la planificación y coordinación a nivel de sistema.

CAMBIO EN EL ESCENARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

En verdad, los sistemas de educación superior en Latinoamérica necesitan una transformación completa –una reforma que no sea una mera reacción de corto plazo a las circunstancias, sino el resultado de una intención determinada y un diseño racional para guiar la expan-

sión, proveer aseguramiento de la calidad consistente, incentivar la perseverancia del estudiante, apoyar la diversificación inteligente y darles a las sociedades los recursos basados en el conocimiento que necesitan.

Algo de esto ya está sucediendo. Hay movimientos incipientes hacia una diversificación de sistemas en algunos países, junto con una mayor preocupación por la inclusión social y la equidad. La región provee algunos ejemplos importantes de programas de preparación universitaria, apoyo para la retención de estudiantes, exámenes de evaluación del valor agregado e información más sólida sobre empleabilidad. Si bien en general la mal regulada expansión del sector privado en la región ha planteado inquietudes sobre la calidad, las nuevas instituciones privadas más consolidadas han aportado innovación y dinamismo a sus sistemas nacionales.

Resulta interesante que la mayor parte de este cambio está tomando lugar fuera de las universidades emblemáticas. Las universidades que no encuentren la forma de participar, usando su capacidad intelectual para contribuir, con respuestas creativas, a las demandas previsibles del futuro, serán excluidas por los sistemas que evolucionarán sin ellas. ■

Disrupción en el área de acreditación de los Estados Unidos

JUDITH S. EATON

*Judith S. Eaton es presidenta en el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior en Washington, DC, Estados Unidos.
Correo electrónico: eaton@chea.org.*

Es un momento de disrupción para la política y los gobiernos y para muchas economías nacionales y culturas. En los Estados Unidos, la disrupción también ha penetrado el área de acreditación, con debates y diferencias sobre el rendimiento académico, acceso y asequibilidad y transparencia, temas que también desafían el aseguramiento de la calidad en todo el mundo. La educación superior, la acreditación y el aseguramiento de la calidad no son inmunes al actual

torbellino de ideas y opiniones contrapuestas.

En la actualidad, la acreditación de los EE.UU. está experimentando un cambio radical. La que ha sido la principal forma de aseguramiento de la calidad y mejoramiento de la calidad en los Estados Unidos por más de 100 años está siendo reposicionada. Está cambiando desde un proceso independiente y colegiado en el que la educación superior decide y evalúa la calidad académica por su propia cuenta, hacia un proceso impulsado por el cumplimiento en el que son los actores externos los que deciden y aplican los requerimientos de calidad que los acreditadores deben usar. Este giro involucra cuatro cambios principales. El primer cambio es en quién provee la supervisión y toma la iniciativa en la acreditación. El segundo cambio es en cómo se define la calidad. El tercer cambio es sobre la rendición de cuentas: para qué y a quién le rinde cuentas la acreditación. El cuarto es en cómo opera la acreditación misma.

Hasta hace poco, el complejo conjunto de 85 organizaciones de acreditación, privadas, no gubernamentales y programáticas de los EE.UU., han estado operando de forma independiente, gestionando y dirigiendo su propio trabajo. Esto continuó incluso cuando, en los años 50, los acreditadores se comprometieron con el gobierno federal de EE.UU. para servir como una autoridad confiable en materia de calidad de la educación superior. Los acreditadores que trabajaron con sus instituciones y programas definieron la calidad. Ellos rendían cuentas a estas instituciones y programas y desarrollaron sus prácticas de acreditación claves con las instituciones y programas.

LA NUEVA Y DIFERENTE SUPERVISIÓN DE LA ACREDITACIÓN

El primer gran cambio es que el gobierno federal de EE.UU. ahora ha asumido la supervisión principal de la acreditación, reemplazando el antiguo manejo independiente de estas organizaciones. El gobierno está expandiendo y profundizando su inspección sobre el funcionamiento de las organizaciones acreditadoras. El gobierno ahora está examinando el desempeño de las organizaciones acreditadoras basándose en sus –no en las expectativas de los acreditadores– expectativas de efectividad de las instituciones y programas acreditados. Esta presencia del gobierno en la acreditación o aseguramiento de la calidad no es inusual en muchos países. Es extraña para los Estados Unidos, dado que la acreditación surgió de la educación superior, no del gobierno, y dado que las organizaciones acreditadores siguen siendo no gubernamentales.

UNA DEFINICIÓN DIFERENTE DE LA CALIDAD

Que el gobierno tome la iniciativa en la acreditación también significa que el gobierno, no la acreditación, está tomando la iniciativa en cómo se define la calidad, el segundo gran cambio. Esto es opuesto a contar con las definiciones de calidad que los acreditadores han estado usando por muchos años, reflejado en estándares que requieren alcanzar el estatus de acreditado. Los estándares constituyen un conjunto amplio de expectativas sobre una institución o programa que incluyen la misión, los recursos financieros, los estándares académicos, el currículo, las ayudas estudiantiles y las instalaciones. Para la acreditación, la calidad se ha tratado sobre tener recursos y procesos esenciales para alcanzar la misión institucional o del programa a un alto nivel de desempeño.

Con la definición de calidad del gobierno, este concepto se reduce y ahora es sobre si los estudiantes se gradúan, obtienen un empleo y tienen una deuda controlable de sus créditos estudiantiles. Este es un cambio desde el concepto amplio e inclusivo de la calidad de la acreditación a una definición utilitaria, o pragmática, que ignora el rol vital de la educación superior en el desarrollo intelectual y en incentivar la participación cívica y compromiso social.

Durante la mayor parte de su historia, la acreditación se ha basado en dos pilares sólidos para su evaluación: las instituciones y programas informan por su cuenta su calidad y efectividad, acompañadas de revisión por pares o académicos que validan la información.

¿PARA QUÉ Y A QUIÉN TIENE QUE RENDIRLE CUENTAS LA ACREDITACIÓN?

Esto nos lleva al tercer cambio principal en el área de la acreditación: la respuesta a “¿para qué y a quién tiene que rendirle cuentas la acreditación?” “Para qué rendir cuentas” se trata de que ahora la acreditación tiene que responder a esta definición diferente de calidad que incluye la graduación, empleabilidad y limitaciones en la deuda. La rendición de cuentas ahora se enfoca, por sobre todo,

en proteger y servir a los estudiantes para el bienestar económico y movilidad. Si una escuela está acreditada, los estudiantes debiesen graduarse en un período razonable, debiesen ser capaces de obtener un empleo y debiesen tener una deuda que sea controlable. Los acreditadores son responsables de detectar y tomar medidas a tiempo en contra de las instituciones que tengan mal desempeño. Son responsables de identificar y tomar medidas con las instituciones que estén involucradas en actividades cuestionables de marketing y reclutamiento.

“A quién rendir cuentas” se trata de que ahora se espera que la acreditación responda, ante todo, a los constituyentes fuera de la educación superior –estudiantes, gobierno y el público. Ya no es suficiente que los acreditadores respondan a las instituciones y programas que ellos examinaban y a la comunidad de la educación superior en general, como se hacía en el pasado. Rendirle cuentas a la amplia esfera pública está surgiendo como el juez principal de la acreditación. Por ejemplo, si una organización acreditadora afirma que está haciendo un buen trabajo, pero las instituciones que acredita gradúan pocos estudiantes o tienen otras dificultades, la organización acreditadora misma es juzgada como deficiente. Lo que las instituciones y programas consideran como acreditación efectiva está siendo substituido por el criterio del público.

EL FUNCIONAMIENTO DE LA ACREDITACIÓN YA NO ES LO MISMO

Durante la mayor parte de su historia, la acreditación se ha basado en dos pilares sólidos para su evaluación: las instituciones y programas informan por su cuenta su calidad y efectividad, acompañadas de revisión por pares o académicos que validan la información. El cuarto gran cambio es que estos pilares de acreditación ya no son vistos como indicadores de información aceptable y una base sólida para que la acreditación juzgue la calidad académica. Especialmente en el caso de la acreditación institucional, la autoevaluación y la revisión por pares ahora se consideran menos confiables. Estas prácticas continúan, pero, cada vez más, hay peticiones para que aumente la autoevaluación y la revisión por pares con verificación externa de los datos e información. Adicionalmente, el gobierno y el público están exigiendo documentos de niveles específicos de desempeño de las instituciones y programas, yendo más allá del típico informe de acreditación que se ha enfocado principalmente en los recursos y el proceso.

CONCLUSIÓN

Por lo tanto, ésta es la disrupción en el área de acredi-

tación de los Estados Unidos. La acreditación ya no está completamente a cargo de su propio funcionamiento; está usando una definición de calidad que no estableció y quizás no apoye; rinde cuentas por calidad primero al público y no a sí misma; y algunas de sus características básicas de funcionamiento ya no son consideradas adecuadas y están siendo mejoradas. La acreditación está siendo reposicionada desde un proceso de revisión de la calidad creado y dirigido por la educación superior como medio para examinar su calidad, hacia un proceso ahora liderado y dirigido por el gobierno, para examinar si la educación superior posibilita la graduación, el empleo y una deuda mínima.

Desde la perspectiva de aquellos que aplauden e incluso incentivan la disrupción, la acreditación hará un mejor trabajo, se enfocará más en lo que los estudiantes y el público necesitan. Para aquellos que consideran que el énfasis está en la fuerza y el valor de la acreditación como ha sido hasta ahora (una iniciativa independiente de revisión por pares y mejoramiento de la calidad), la acreditación habrá sido seriamente dañada. Como sea que se perciba esta disrupción, la acreditación continuará siendo clave para la revisión de la calidad, pero de una forma significativamente diferente. ■

La importancia de los politécnicos para el desarrollo de África

GOOLAM MOHAMEDBHAI

Goolam Mohamedbhai es ex secretario general de la Asociación de Universidades Africanas. Correo electrónico: g_t_mobhai@yahoo.co.uk.

En el Reino Unido, los politécnicos habían existido desde el siglo diecinueve, pero ganaron protagonismo en los años 60. Su objetivo principal era ofrecer mano de obra técnica especializada e ingeniería para promover la industrialización. Se diferencian de las universidades de varias maneras: de cierto modo exigían requisitos de admisión más bajos; ofrecían principalmente subprogramas que eran menos rigurosos académicamente y se enfocaban